

Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

En los antecedentes RUC N° 1810042614-1 y RIT 4-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, se dictó sentencia el cuatro de junio de dos mil veintiuno, por la que se condenó al acusado Rodrigo Isaías Corales Chacón, como autor del delito consumado de Conducción en Estado de Ebriedad sin Haber Obtenido Licencia de Conducir, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación a los artículos 110, 111 y 209 inciso 2°, todos de la ley de Tránsito, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más el pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a dos Unidades Tributarias mensuales (UTM), y a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, especial de prohibición de obtener licencia de conducir por cinco años, pena principal de cumplimiento efectivo con los abonos consignados en la sentencia.

En contra del fallo, la defensa interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia de cuatro de febrero pasado, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta levantada al efecto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de nulidad interpuesto se sustentó en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por la infracción sustancial de derechos o garantías asegurados en la Constitución Política en relación al artículo 8° N° 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales, lo que se verificaría en la especie al haber sido juzgado por un hecho acaecido el 15 de septiembre de 2018, por el cual



fue detenido el mismo día y formalizado al día siguiente, habiéndose decretado prisión preventiva en aquella misma fecha, realizándose juicio oral recién con fecha 31 de mayo de 2021, lo cual no sería más que producto del cierre de la investigación comunicada por el fiscal en audiencia de fecha 11 de noviembre de 2020 a consecuencia directa de la solicitud de sobreseimiento definitivo por parte de la defensa en la misma oportunidad. En estos autos no se apreciaría racionalidad alguna en la duración del proceso criminal, pues el cierre de la investigación y posterior acusación formal ocurre cuando han transcurrido más de 2 años de investigación (y de la ocurrencia del hecho investigado) y como una reacción espontánea a la solicitud de la defensa de sobreseimiento definitivo, con lo cual se infringiría el principio de justicia pronta, reconocido internacionalmente y consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica.

Concluyendo, pidió que se anulara la sentencia recurrida dictándose, sin nueva vista pero separadamente, sentencia de reemplazo a través de la cual se absolviera al imputado Rodrigo Isaías Corales Chacón por no haber sido juzgado dentro de un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, para un adecuado entendimiento de lo que debe resolverse, es conveniente recordar, en lo pertinente al recurso, que los jueces del Tribunal Oral tuvieron por establecido los siguientes hechos:

“El día 15 septiembre del año 2018, alrededor de las 22:00 horas, Rodrigo Isaías Corales Chacón, conducía en manifiesto estado de ebriedad una camioneta blanca marca JAC, modelo V6, por la carretera San Martín de la comuna de Rinconada. Personal de Carabineros que efectuaba un patrullaje preventivo por el sector, fue alertado por otros conductores de la circulación zigzagueante del vehículo antes referido, por lo que se le dio alcance controlándosele en la carretera San Martín esquina calle Ana María Carey de



la comuna Rinconada, percatándose los aprehensores que su conductor, Rodrigo Isaías Corales Chacón, se encontraba en manifiesto estado de ebriedad al presentar fuerte hálito alcohólico, inconsistencia al hablar, y dificultad para mantenerse de pie, efectuándosele el examen respiratorio intoxilyzer que arrojó un resultado de 1,80 gramos por mil de alcohol en la sangre, deteniéndosele en el lugar.

El señor Corales no tenía licencia de conducir a la fecha de los hechos y se encontraba cumpliendo la pena sustitutiva de reclusión nocturna domiciliaria por una condena que le fue impuesta en el Juzgado de Garantía de San Felipe, el 4 de junio del año 2018, en que se le condenó a la pena 541 días de presidio menor en su grado medio como autor del delito de conducción en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir.

Finalmente, el resultado de la alcoholemia que se le practicó al imputado en el recinto asistencial fue de 1,72 gramos por mil de alcohol en la sangre conforme el informe de alcoholemia número 9268 del año 2018 del Servicio Médico Legal de Valparaíso.”

Estos acontecimientos fueron calificados como constitutivos del delito consumado de conducción en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir, previsto y sancionado en los artículos 196, 110 y 111 en relación al artículo 209, todos de la Ley N°18.290.

TERCERO: Que, de lo referido en el fundamento primero que antecede, se advierte que las afectaciones que acusa la defensa dicen relación con la demora por más de dos años desde la formalización de su defendido en que estuvo en prisión preventiva y ante una solicitud suya de sobreseimiento definitivo luego de concluido ese plazo, recién el proceso pudo avanzar.



CUARTO: Que en relación a los cuestionamientos levantados en la causal en estudio, los jueces expresaron en el razonamiento undécimo del fallo en entredicho que:

“(…)Rechazo de la tesis absolutoria de la Defensa. Como fluye del análisis de los alegatos de la Defensa, ésta solicitó la absolución de su representando al no haber sido éste juzgado en un plazo razonable, garantía que estima vulnerada conforme a los argumentos que se analizarán en los siguientes párrafos.

Primeramente, debemos recordar que el proceso judicial envuelve una serie de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, un conflicto sometido a su decisión, lo que, por definición conlleva tiempo. En tal sentido, desde el conocimiento de la perpetración de una conducta ilícita, se desencadenan una serie de diligencias y actuaciones judiciales cuyo fin es determinar a la postre y tras una investigación previa del persecutor, la existencia de la conducta típica que merece una sanción, por lo que el proceso penal es el medio a través del cual el Estado ejerce su poder punitivo con el propósito de conseguir un fin, y es por ello que su duración reviste tanta importancia, porque durante él, no sólo se afecta en algunos casos la libertad personal del imputado, sino que también su nombre y su honra.

Como bien lo postula la Defensa, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es una garantía constitucional vigente en nuestro país al estar comprendida en los catálogos de derechos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención Americana de Derechos Humanos - artículo 5° de la Carta Fundamental -, pero también podemos considerar que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene plena eficacia a partir de los



dispuesto en el artículo 19 N°3, inciso 5°, de la Constitución Política que contempla el derecho a un proceso justo, ya que jurisprudencial y doctrinariamente se ha sostenido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, se encuentra inserto dentro del derecho a un debido proceso y éste, a su vez, forma parte de los derechos fundamentales más relevantes a nivel procesal, en un ordenamiento jurídico, como lo es el derecho a la tutela judicial efectiva.

Nuestro Código Procesal Penal, estableció variados principios y derechos en acorde a las normas constitucionales e internacionales, más no hizo referencia expresa al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ni en los principios básicos establecidos en el título primero, ni en las demás normas que rigen las actuaciones procesales. Sin embargo, sí fijó plazos para determinadas actuaciones que se ajustan a los parámetros internacionales a los cuales Chile se obligó al suscribir tanto el Pacto como la Convención Americana ya citadas.

Por tanto, nuestro Código, sin definir lo que debe entenderse como un plazo razonable, contempla éstos para realizar todas las actuaciones durante el proceso, tales como el plazo de duración de la investigación con un máximo dos años desde que hubiese sido formalizada, debiendo el fiscal proceder a cerrarla; también el plazo de 10 días que tiene el fiscal para deducir acusación; el plazo para citar a audiencia de preparación de juicio oral el que no puede exceder de 35 días desde que se hubiese deducido la acusación; así, como el plazo máximo de 60 días para citar a audiencia de juicio oral; o el plazo de 10 días para deducir recurso de nulidad, entre otros.

Así, la ley ha establecidos plazos para la duración de la etapa investigativa y para las diligencias posteriores hasta la dictación de la sentencia



definitiva, lo que posibilita afirmar que con ello nuestro país ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas al ratificar los convenios internacionales referidos, ya que ha fijado un plazo máximo de duración del proceso penal evitando que aquellos se extiendan indefinidamente en el tiempo, proscribiendo así arbitrariedades.

Como lo expuso latamente el abogado defensor en sus alocuciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la evaluación del plazo razonable debe ser analizado “en cada caso concreto”, en relación con la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva, considerando, de esta manera, cuatro elementos para garantizar el plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

En base a ello, sostuvo que estamos fuera de lo que puede entenderse como plazo razonable, porque nos encontramos frente a un delito sencillo, un manejo en estado de ebriedad cometido el día 15 de septiembre de 2018, el que, dada su flagrancia y confesión de su representado, no requería mayores diligencias investigativas, pues desde el mismo día de su comisión se contó con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, siendo la última diligencia investigativa útil el resultado del informe de alcoholemia que data de 8 de octubre de 2018, bastando solo un par de meses para su investigación y posterior resolución, acusando inactividad - y por qué no decirlo – desidia y mala fe de parte del Ministerio Público en la persecución penal, ya que desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta el presente juicio oral, han transcurrido ya dos años y ocho meses, largo tiempo de sustanciación que



necesariamente decanta en la infracción al debido proceso y una sentencia absolutoria en favor de su representado. Hizo hincapié una y otra vez en que el acusador no realizó diligencias investigativas durante el término de dos años y que, además, cerró la investigación fuera del término legal, lo que motivó su solicitud de sobreseimiento definitivo fundado en la letra e) del artículo 250 del Código Procesal Penal, por un hecho sobreviniente que, con arreglo a la ley, pone fin a la responsabilidad penal del encartado, petición que fue desestimada por el Tribunal de Garantía, apelada y confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, último antecedente que fue aportado por el Ministerio Público en su clausura y que a todas luces parece evidente porque de haber sido acogida la pretensión de sobreseimiento definitivo, no nos encontraríamos en la presente audiencia de juicio oral.

Como primer punto, consideramos que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, es un concepto jurídico indeterminado, que carece de baremos específicos dentro de los cuales se encuadre su aplicación, esto es, no contiene la determinación de lo que debe entenderse como un plazo razonable y, en ese contexto, para determinar que dicho término ha sido o no excedido, se requiere ponderar caso a caso una serie de condiciones tanto previstas como no previstas en la ley, debiendo entenderse la razonabilidad dentro del contexto de lo posible y no lo imposible, más aún en atención a la situación sanitaria que azota hoy al mundo desde principios de 2020.

En tal sentido, analizando las argumentaciones vertidas y las probanzas rendidas en estrados, en especial la documental incorporada, es posible sostener que tanto la actividad del Ministerio Público como la de los órganos jurisdiccionales involucrados, se ha ajustado a los plazos contemplados en nuestra legislación; es decir, si bien pudo cerrarse la investigación en



noviembre de 2020 como lo señaló el señor Defensor, lo cierto es que aquello se debió a que antes de comunicarse el cierre **y vigente aun en término de dos años de la investigación**, es decir, antes del 15 de septiembre de 2020, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía audiencia para un procedimiento abreviado con el fin de instar por la conclusión de la causa, como lo señaló el sr. Fiscal, la que debió fijarse por el Tribunal conforme al contexto de pandemia y teniendo en consideración lo dispuesto en la ley N°21.226 y los autos acordados de la Corte Suprema sobre la materia, teniéndose presente que en esta causa, además, el acusado solo se encontraba sujeto a medidas cautelares de baja intensidad, artículo 155 letras c) y d). Al no haber prosperado acuerdo entre los intervinientes en aquella audiencia solicitada por la Fiscalía antes del 15 de septiembre de 2020 que se cumplieran los dos años y fijada por el tribunal para noviembre de 2020, el Ministerio Público cerró en aquella oportunidad la investigación, acusó dentro del término de diez días y prosiguió la tramitación del proceso hasta arribar a esta audiencia de juicio oral.

La Defensa planteó que al no cerrarse investigación dentro de los dos años de formalizada la investigación, sino después producto de esta maniobra dilatoria de solicitud de procedimiento abreviado por parte de la Fiscalía antes de vencerse el plazo, necesariamente conllevaba el sobreseimiento definitivo del acusado y/o su absolución por parte de este Tribunal. Lo cierto es que el cierre de la investigación no es un trámite automático que se produce tan pronto vencido el plazo de dos años de formalizada la investigación, y si se analiza el precepto legal aplicable, 247 del Código Procesal Penal y la premura que reclama la Defensa en la pronta conclusión del proceso producto la incerteza jurídica de su representado, lo



que correspondía era que él mismo solicitara al juez de garantía que se apercibiera al fiscal para tal cierre; sin embargo, teniendo las herramientas procesales para resguardar los intereses de su defendido, no lo solicitó sino que realizó la petición de sobreseimiento que fue rechazada, ya que ciertamente el solo transcurso del tiempo no es causal de ningún tipo de sobreseimiento.

Se advierte que el sobreseimiento (que en su oportunidad fue rechazado) como la alegación de absolución planteada el día de hoy en estrados, tienen el mismo fundamento, el cierre de la investigación pasado poco más de un mes y medio de cumplidos los dos años desde la formalización por estimarse aquello “un plazo no razonable”, lo cual ya fue debatido y zanjado en su oportunidad. Tanto el sobreseimiento como la absolución hoy pretendida, son equivalentes jurisdiccionales en la medida que son formas de poner término al proceso, por lo que en esta sede no puede nuevamente volver a levantarse la misma discusión por los mismos argumentos al haber sido éstos ya objeto de debate, existiendo una sentencia interlocutoria que produce el efecto de cosa juzgada. El solo transcurso del tiempo, per sé, no decanta indefectiblemente en una decisión absolutoria como se pretende, menos aún cuando no se observan infracción de garantías fundamentales como se indicará.

Se señala por la Defensa que desde el 18 de diciembre de 2018, que fue el día en que el imputado recobró su libertad por esta causa y noviembre de 2020 que se cerró la investigación, no hubo diligencias investigativas, lo cual no es efectivo, y si bien pudo tratarse de un delito flagrante que ciertamente disminuye la complejidad del asunto sometido a investigación, en este caso, la situación requería de mayores diligencias,



*puesto que el acusado, a la época de comisión de estos hechos, el 15 de septiembre de 2018, se encontraba recién cumpliendo una condena impuesta por el Juzgado de Garantía de San Felipe, por idéntico delito por el que hoy se le juzga, conducción en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir, en causa Rit 3757-2016 de dicho juzgado y por la que fuera sentenciado el 4 de julio de 2018, es decir tres meses antes de la comisión del delito materia de este juicio, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, penas accesorias legales y suspensión de licencia de conducir por dos años, concediéndosele como pena sustitutiva la reclusión parcial nocturna domiciliaria, con monitoreo telemático, tal como se lee de la sentencia acompañada y del documento 3.9 del a.a, Oficio N°050201/2887/2019 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, que indica que al ingresar el interno Corales Chacón a dicho centro, portaba el dispositivo de monitoreo telemático. Conforme al documento N°3.10 (a.a) correspondiente al ordinario 5.23.01/97/2020 de fecha **30 de enero de 2020**, el Centro de Reinserción Social de Los Andes informó a requerimiento de la Fiscalía Local que el acusado se mantuvo sujeto bajo control de dicha unidad con la pena de reclusión parcial nocturna domiciliaria con monitoreo telemático en causa Rit 3757-2016 del Juzgado de Garantía de San Felipe, desde el 5 de junio de 2018 hasta el 17 de septiembre de 2018, en que el dispositivo fue desactivado porque ingresó a cumplir prisión preventiva en esta causa, señalándose en el mismo oficio que el penado, luego de recuperar su libertad, lo que ocurrió el 18 de diciembre de 2018 según se lee del auto de apertura, se mantuvo cumpliendo pena de reclusión parcial en esa unidad.*

Mal se puede hablar de inactividad del acusador desde que era necesario recabar una serie de documentos para un acertado juzgamiento,



más aún cuando al acusado le perjudicaba la calificante del artículo 209, inciso 2°, de la ley de tránsito que requería su acreditación en el curso del juicio, no siendo ésta una circunstancia ajena al hecho punible como lo indicó el defensor. Solo a modo de ejemplo, el 4 de marzo de 2019, se remitieron a la Fiscalía Local de Los Andes, copias legalizadas de sentencia ejecutoriada en causa Rit 3757-2016 del Juzgado de Garantía de San Felipe, documento 3.8 del a.a; el siete de enero de 2019, en respuesta al ordinario N°23372/2018 de la fiscalía local, el Tribunal de Garantía de San Felipe ordenó remitir copia de otra sentencia con certificado de ejecutoria de fecha 4 de marzo de ese año (Oficio N°1240-2014 del Tribunal de Garantía, documento 3.4 del a.a) en Causa Rit N°2907-2014 del mismo, dictada también en contra del imputado y por la que fuera condenado el 14 de octubre de 2014, en procedimiento simplificado, a 61 días de presidio menor en su grado mínimo con reclusión parcial por manejar sin licencia debida, documentos 3.7.a.a; el Ordinario N°5.23.01/97/2020 del Centro de Reinserción de Los Andes, documento 3.10 del auto de apertura, recién fue recibido en la Fiscalía con fecha 31 de enero de 2020, como consta del timbre estampado en éste, y finalmente antes de los dos años a que se refiere el artículo 247 del Código Procesal Penal, se instó por parte de la fiscalía por un procedimiento abreviado, por lo que durante el plazo investigativo sí existieron diligencias de investigación, siendo ilustrativos los documentos antes anotados para desestimar la inactividad denunciada.

La Defensa indica que todos los documentos requeridos son propios de la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, lo que si bien en parte puede ser cierto, se solicitaron en el período de investigación, justamente, porque el juicio oral es un derecho para el imputado, pero no la única opción, por lo que perfectamente en caso de haber existido acuerdo entre los



intervinientes, se podría haber celebrado un procedimiento abreviado como lo propuso el Ministerio Público, y en ese momento el acusador requería contar con todos los antecedentes solicitados a los diversas entidades. Más allá de la conducencia o no que estos sentenciadores puedan otorgar a los mismos, lo cierto es que en su momento el acusador consideró que eran importantes de recabar, siéndole privativa la facultad investigativa.

Pero volviendo al tema que realmente interesa y que es la razonabilidad del plazo, como lo dijimos, ésta ha de determinarse no sólo con arreglo a los parámetros internacionales referidos por la Defensa, sino conforme a las circunstancias especiales del imputado, y, en este caso, de acogerse los argumentos de la Defensa en términos de que su representado debió ser juzgado de manera casi inmediata a los hechos y tan pronto recuperó su libertad, lo que ocurrió el 18 de diciembre de 2018, aquello más que beneficiarlo lo habría perjudicado severamente.

Si se siguiera la lógica planteada en juicio por el defensor, el acusado tendría que haber sido condenado en esta causa mientras cumplía con la pena sustitutiva de reclusión nocturna domiciliaria por el término de 541 días y que recién había comenzado a cumplir el día 5 de junio de 2018 en causa Rit 3757-2016 del Juzgado de San Felipe; es decir, se le habría condenado a una pena por esta causa en la que no tiene derecho a pena sustitutiva alguna y, además, se le tendría que haber revocado la sustitutiva de reclusión parcial nocturna domiciliaria concedida en causa Rit 3757-2016, al haber sido nuevamente condenado mientras cumplía condena con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N°18.216. Por tanto, habría tenido que cumplir prácticamente dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio privado de libertad; sin embargo, y como se lee del Ordinario 5.23.01/97/2020 de fecha 30 de



enero de 2020, del Centro de Reinserción Social de Los Andes, el acusado, luego de cesar su prisión preventiva en esta causa, siguió cumpliendo con la reclusión parcial domiciliaria, por lo que, ciertamente, esta dilación reclamada solo cedió en su beneficio. La Defensa otorga nula importancia a dicho documento al ser inconducente para al juzgamiento, aserto que no compartimos, pues éste, cuyo contenido no fue objetado, dio cuenta de la situación del imputado que nos permite sostener lo perjudicial que habría resultado acoger la inmediatez reclamada en este juicio.

Se alega una injustificado y excesivo paso del tiempo; sin embargo, de estimarse que lo hubo, sin lugar a dudas no fue arbitrario ni injustificado, sino que tuvo como fundamento el resguardo de los propios intereses del acusado: amparar su libertad personal en tiempos de pandemia, tal como lo señaló el Fiscal en su clausura.

La razonabilidad del plazo, también, ha de evaluarse en consonancia con las medidas cautelares a que se encuentra afecto el acusado, y, en esta causa, Rodrigo Corales Chacón estuvo solo tres meses privado de libertad, desde el 15 de septiembre al 18 de diciembre de 2018, substanciándose prácticamente todo este proceso sujeto a las medidas cautelares de obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del país, y mientras cumplía su otra condena en libertad – con arresto domiciliario nocturno -.

Imperioso era entonces que la Defensa demostrara la existencia de una afectación cierta y seria que causara un perjuicio objetivo a su representado como consecuencia del exceso de plazo razonable, lo que no ha ocurrido en la especie como se anotó en el párrafo anterior, y, en el evento de haber sido así, contaba con las herramientas procesales para reclamarlo como lo era, por



ejemplo, solicitar audiencias de cautela de garantías en los términos del artículo 10 del Código Procesal Penal, lo que tampoco hizo, limitándose a alegar en juicio que el exceso de plazo era suficiente para la absolución lo que, ciertamente, no compartimos. Si bien el impulso procesal lo tiene el Ministerio Público, la Defensa también cuenta con las herramientas procesales en resguardo de derechos fundamentales de su defendido; sin embargo, de su no ejercicio profita hoy para solicitar una decisión absolutoria. Como lo ha reiterado en numerosos fallos la Excelentísima Corte Suprema, para efectos de entenderse vulnerado el derecho, el agravio a la garantía del debido proceso debe ser tal en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte que los reclama. La infracción producida a los intereses del interviniente exige la sustancialidad, trascendencia, importancia o gravedad de modo tal que el defecto haga insalvablemente ineficaz el derecho constitucional del debido proceso, lo que en el caso sub lite no se advierte.

Por tanto, es precisamente del estudio de todas estas circunstancias en su conjunto las que nos permiten sostener, sin lugar a dudas, que hubo un juzgamiento dentro de un plazo razonable, y habiéndose acreditado conforme a la valoración de las probanzas rendidas los hechos y la participación del acusado, no cabe más que desestimar la pretensión absolutoria impetrada.”

QUINTO: Que a fin de dirimir lo planteado por los recurrentes, debe tenerse especialmente en cuenta que la alegación de la recurrente se basa en la demora que estima excesiva entre la fecha de la formalización, 16 de septiembre de 2018 y el 11 de noviembre de 2020 en que se comunicó por la Fiscalía el cierre de la investigación, sin ahondar en el curso del procedimiento en lo sucesivo, y sin detenerse en el hecho no discutido de que el Ministerio Público en el tiempo intermedio hizo un ofrecimiento de procedimiento



abreviado que en definitiva no prosperó, hasta resolverse la causa en un juicio cuya fecha permitió que su defendido pudiera cumplir una pena previa en que se le condenó imponiéndosele una pena sustitutiva, por hechos diversos., siendo los de esta causa materia de prueba y debate en el proceso, y frente a cuyo mérito se pronunció, en definitiva, una sentencia en que resultó condenado.

Así las cosas, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, efectúe una nueva valoración de esas probanzas en que fue oída y recibidos sus medios de acreditación, tome en consideración ahora circunstancias que no fueron discutidas con anterioridad y que –por lo demás– no se avizora que hayan provocado perjuicio a dicha interviniente, todo lo contrario, esta agotó todos sus medios para obtener una contrapretensión, sin mayor éxito por la dinámica propia de un juicio.

A lo anterior debe sumarse la necesaria constatación de la época en que se habría producido el vicio, del todo inusual derivada por la situación vivida en el país a consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la propagación del COVID-19, que obligaron a la dictación de normas excepcionales como las contenidas en la ley N° 21.226.-, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, y la dictación de auto acordados emanados precisamente de esta Corte para atender dicha contingencia, de manera que los plazos a los que alude deben entenderse con todas esas consideraciones en mira.

SEXTO: Que, en ese orden de ideas, conforme a lo que los jueces orales han explicado lata y exhaustivamente en el considerando undécimo de



la sentencia recurrida, tal como se refirió en el considerando cuarto, no se atisba infracción a lo dispuesto en los tratados internacionales como los aludidos en el recurso impetrado, a saber, la *Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)* en su artículo 8 N° 1, o como también puede decirse del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 N° 3 letra c*).

En efecto, tales instrumentos internacionales refieren conceptos jurídicos que dicen relación al debido proceso, como el *plazo razonable* y la prohibición de incurrir en *dilaciones indebidas*, los que deben evaluarse caso a caso y según la situación en concreto analizada, sin que se observe, acorde a lo razonado, cómo podría verificarse en la especie su transgresión.

SÉPTIMO: Que, de este modo, si bien en este caso se ha constatado un retraso en el proceso, éste no resulta atribuible a una dilación indebida que haya provocado perjuicio al interviniente que acude de nulidad, pues ello presupone un perjuicio, el que ya se ha dicho tampoco se advierte en el caso en análisis.

Como esta Corte ha resuelto uniformemente, el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende debe suponer un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de



los intervinientes en el procedimiento (SCS Roles N° 2.866-2013 de 17 de junio de 2013, 4.909-2013 de 17 de septiembre de 2013; 21.408-14 de 8 de septiembre 2014; 28.109- 18, de 4 de febrero de 2019 y 21-2019, de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve), situación que no se ha advertido en el caso de marras, razones todas por las que el recurso de nulidad no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo establecido en los artículos 372, 373 letra a), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de acusado Rodrigo Isaías Corales Chacón en contra de la sentencia condenatoria en la causa RUC N° 1810042614-1 y RIT 4-2021, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes con fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, y contra el juicio oral que le antecedió, los que en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Biel.

Rol N° 39.853-21.-

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., y los Ministros Suplentes Sres. Rodrigo Biel M., y Miguel Vázquez P. No firma el Ministro Suplente Sr. Vázquez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.





En Santiago, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

